

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

PROYECTO DE ACUERDO No. 050

**“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN CON
DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS
SOCIALES EN SANTIAGO DE CALI-SISBEN”**

H.C. ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO
Concejal Ponente

Santiago de Cali, Septiembre de 2017

I. ANTECEDENTES

El 4 de septiembre de 2017, durante las sesiones extraordinarias convocadas por el señor Alcalde de Santiago de Cali, Dr. Maurice Armitage Cadavid, mediante Decreto N° 4112.010.20. 0568 del 31 de agosto de 2017, se radico un proyecto de acuerdo que pretende destinar vigencias futuras ordinarias para la administración del sistema de clasificación e identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en Santiago de Cali a través de la plataforma SISBEN, la cual es de vital importancia para que los habitantes que se encuentran en situación de pobreza puedan acceder a los beneficios que ofrece el Estado a modo de subsidios en distintos rubros tales como: salud, vivienda, adulto mayor, familias en acción, jóvenes en acción, etc.

Además, como dicho programa es de carácter estatal, el municipio debe asegurar la continuidad del mismo, especialmente ante la disyuntiva de la entrada en rigor de la ley de garantías, mecanismo que impide la celebración de cualquier tipo de contratación en vista de la proximidad de las elecciones presidenciales y como medida de protección del sistema democrático que rige nuestro país, el proyecto fue intitulado **“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN SANTIAGO DE CALI-SISBEN”**.

La presidencia de la Corporación Concejo de Cali mediante resolución No 21.2.22-465 del 5 de septiembre de 2017 me designo como ponente del proyecto, el cual quedo radicado con el No 050, la cual también sería apoyada por la Honorable Concejal MARIA GRACE FIGUEROA RUIZ. Sin embargo, dicha concejal renunciaría a la ponencia el día 6 de septiembre de 2017, mediante resolución N° 21.2.22-467.

Dicho proyecto fue asignado a la comisión primera o de presupuesto para que se iniciara el respectivo estudio. Dicha apertura se realizó el 15 de septiembre de 2017 y conto con la participación del Dr. NAYIB YABER ENCISO-Director del Departamento de Gestión Jurídica Pública, Dr. ALEXANDER DURAN PEÑAFIEL-Secretario de Salud de Santiago de Cali y del Dr. JORGE IVAN ZAPATA LÓPEZ-Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, cada una de las dependencias anteriormente mencionadas sustentaron la viabilidad, conveniencia y pertinencia del mismo. Durante el desarrollo de ésta sesión solicite la apertura del libro de participación ciudadana, con el fin de surtir dicho trámite en la siguiente sesión.

Los conceptos correspondientes de viabilidad del proyecto de acuerdo se encuentran especificados a continuación: En primer lugar, la Dirección Jurídica de la Alcaldía Municipal mediante oficio radicado N° 201741210100033074 del 30 de agosto de 2017, destacando los fundamentos constitucionales y otros fundamentos legales que dan cuenta de la importancia del SISBEN, de los derechos fundamentales que se protegen mediante la implementación de este y la normatividad respecto del uso de las vigencias futuras ordinarias, dando así concepto favorable al proyecto de acuerdo.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal mediante oficio radicado N° 201741320400015294 del 24 de julio de 2017, emitió concepto técnico favorable en vista de estar conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali Progresas Contigo”, lo cual indica que hay una correspondencia y pertinencia del proyecto, ajustándose plenamente a los objetivos trazados por esta administración.

Así mismo, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal emitió concepto de viabilidad con oficio radicado N° 201741310200015874 del 28 de julio de 2017, emitió concepto de viabilidad toda vez que el proyecto de acuerdo no afecta la estabilidad financiera del municipio, puesto que los recursos requeridos para la vigencia futura ordinaria, se encuentran aforados dentro de los proyectos de inversión no representando gastos adicionales a los establecidos en el marco fiscal de mediano plazo. Además, certifica que dicho proyecto es consistente con las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 89 de 2003.

Por último, la Subdirección de Finanzas Públicas remite el acta del CONFIS MUNICIPAL N° 4131.020.1.13.032-2017 del 17 de julio de 2017, en donde se aprueba la solicitud de asunción de compromiso con vigencias ordinarias presentado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, teniendo en cuenta que dicha dependencia cumple con las normas establecidas en la Ley 819 del 9 de julio de 2003 y mediante el oficio radicado N° 201741310200015874 ratifica que el proyecto de acuerdo no afecta la estabilidad financiera de la entidad territorial, aparte de que la misma se encuentra en ejecución del plan de desempeño, cumpliendo con los indicadores de la Ley 358 de 1997 de solvencia y sostenibilidad.

El día 19 de julio de 2017 se continuó con el estudio del proyecto, en la cual participó la directora del SISBEN por parte de la Universidad del Valle-Dra. CLAUDIA MARÍA PELAEZ NARVAÉZ, la cual expuso en cifras los índices de pobreza que se registran en la ciudad tanto en el casco urbano como en la zona rural y como la actual metodología castiga a los potenciales beneficiarios por el hecho de vivir en un determinado lugar o por su edad. La intervención se cerró con un compromiso de realizar un debate de corte social por parte del Concejo de Cali, con el fin de reconocer e identificar la realidad social real del Municipio.

Se solicitó el cierre del estudio del Proyecto de Acuerdo por considerar que hubo suficiente ilustración, puesto que todas las dependencias involucradas en el estudio del mismo participaron activamente y ofrecieron las explicaciones suficientes a la corporación. Cinco Honorables Concejales dieron voto positivo para tal fin (ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO, JUAN PABLO ROJAS SUAREZ, HENRY PELAEZ CIFUENTES, AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA Y RICHARD RIVERA CAMPO). También se solicitó la fecha para la Ponencia de Primer Debate.

En la sesión de la Comisión de Presupuesto del día 20 de Septiembre de 2017, se sometió a consideración de los honorables miembros de la Comisión, la Ponencia para Primer Debate, siendo aprobada por los cinco Honorables Concejales que se encontraban presentes: ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO, AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA, OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR, HENRY PELAEZ CIFUENTES Y JUAN PABLO ROJAS SUÁREZ.

II. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO

1. ASPECTOS GENERALES VIGENCIAS FUTURAS

A. PRINCIPIOS PRESUPUESTALES:

La Constitución dispuso dos principios básicos del presupuesto Público Colombiano que aplican al mecanismo de “Vigencias Futuras” que son: el de Universalidad y el de Anualidad.

Principio de Universalidad:

Establece que todo gasto debe estar incluido en el presupuesto y que ninguna autoridad podrá efectuar gastos que no figure en él.

Principio de Anualidad:

Dispone que el gobierno anualmente formulará el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, lo cual fue desarrollado por la ley orgánica en donde se determinó la vigencia fiscal desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre. El artículo 14 del Decreto ley 111 de 1996 lo define como:

“El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10)”

Sobre el mismo principio, se pronunció la Honorable Corte Constitucional en los siguientes términos:

“La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe hacer periódicamente cada año, del 1o. de enero al 31 de diciembre, integrando la unidad de cómputo determinada temporalmente en un período de tiempo. Es la renovación anual de la intervención del Congreso en las materias fiscales, de modo que sientan la permanencia y continuidad de la potestad legislativa en tales asuntos. Este principio hace parte de nuestro ordenamiento jurídico debido a la función de control político integral del Congreso, pues a medida que éste se consolidó, reclamó para sí la intervención en los asuntos fiscales, de manera periódica y continua. Su objetivo principal es facilitar la labor de armonizar la gestión presupuestal con otras actividades que tienen lugar también dentro del marco anual. El principio de la anualidad tiene, pues, la ventaja de acomodar la gestión.”¹

De igual forma el artículo 12 del Decreto ley 111 de 1996, por el cual se estableció el Estatuto Orgánico de Presupuesto, regula principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macro económica y la homeóstasis (Ley 38/89, artículo 8o. Ley 179/94, artículo 4o.).

¹ C-337 de 1993 M.P. Vladimir Naranjo

Estas características del presupuesto han propiciado el uso de figuras que permitan el financiamiento del servicio estatal de manera continua, en los casos que se deba pasar la primera vigencia, el mecanismo a utilizar será las Vigencias Futuras.

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras ordinarias para las entidades territoriales, tiene su fundamento legal en la Ley 819 de 2003 "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales".

Adicionalmente, desde el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional se encuentra reguladas por los siguientes artículos:

Decreto-Ley 111/1996

“ARTÍCULO 23. La dirección general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar la asunción de obligaciones, que afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas.

Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección general del presupuesto nacional, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.

Las entidades territoriales podrán adquirir esta clase de compromisos con la autorización previa del concejo municipal, asamblea departamental y los consejos territoriales indígenas, o quien haga sus veces, siempre que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de endeudamiento.

Esta disposición se aplicará a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas. El gobierno reglamentará la materia.

El gobierno presentará en el proyecto de presupuesto anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras (L. 179/94, art. 9º)” (subrayado y resaltado propios)

"ARTÍCULO 24. El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. La secretaría ejecutiva enviará a las comisiones económicas del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el consejo, para estos casos. Los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requerirán de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Estos contratos se regirán por las normas que regular las operaciones de crédito público (L. 225/95, art. 3º)."

“ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto (Ley 225 de 1995, art. 32).

ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente.”

B. COMPETENCIA ENTIDADES TERRITORIALES:

Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las entidades territoriales, en general, y para los Municipios, en especial, se encuentran establecidos en las siguientes disposiciones de la Constitución Política:

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

(...) 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos.”

El Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado mediante el Decreto 111 de 1996, reguló en los siguientes términos, las competencias de las entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos presupuestales. ”

“ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.

ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

La adquisición de obligaciones para comprometer presupuestos de Vigencias Futuras en el municipio de Santiago de Cali, tiene su fundamento legal en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal adicionado por el Acuerdo 211 de 2007, que a su vez había modificado el artículo 1° del Acuerdo 198 de 2006 con un párrafo del siguiente tenor: “Parágrafo 1°. Adóptense las vigencias futuras ordinarias y excepcionales de conformidad con lo establecido en la ley o normas vigentes.”

C. ¿QUÉ SON LAS VIGENCIAS FUTURAS Y CUÁL ES SU CLASIFICACIÓN?

Las “Vigencias Futuras” es un mecanismo mediante el cual se plantea el gasto haciendo uso de una o varias vigencias fiscales siguientes a la actual.

Ley 819 de 2003 "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales". Estableció para las entidades del orden nacional dos tipos de vigencias Futuras:

- Ordinarias: Cuya Ejecución se inicia afectando el presupuesto de la vigencia en curso (art. 10 para el orden nacional y 12 para el orden territorial).
- Excepcionales: Cuyas obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras y NO Cuentan con apropiaciones en el presupuesto de la vigencia en que se concede la autorización estas serán aprobadas para obras de infraestructura y garantías de concesiones (Artículo 11 – ley 819 de 2003)

D. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 819/2003

Las vigencias futuras a solicitar deberán cumplir con los requerimientos exigidos por la Ley 819 de 2003, así:

“Artículo 11. Vigencias futuras excepcionales. El artículo 3º de la Ley 225 de 1995 quedará así:

El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en casos excepcionales para las obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa y seguridad, así como para las garantías a las concesiones, podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deberán consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo del que trata el artículo 1º de esta ley.

La secretaría ejecutiva del Confis enviará trimestralmente a las comisiones económicas del Congreso una relación de las autorizaciones aprobadas por el Consejo, para estos casos.

Para asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis. Estos contratos se registrarán por las normas que regulan las operaciones de crédito público.”

“Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.”

- a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo, las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 5º de la Ley 819 de 2003.
- b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

- c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica.

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito público.

Parágrafo transitorio. La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente período de Gobernadores y Alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo.

2. MARCO JURISPRUDENCIAL

- Sentencia C-337 de 1993:

La Corte Constitucional, declaró exequible el artículo 76 de la ley 21 de 1992, considerando que es lógico que en el presupuesto de cada año se hagan las apropiaciones correspondientes a los gastos que deban hacerse en varias vigencias sucesivas.

“(..). En síntesis: en nada viola la Constitución el que se contraigan compromisos que cubran varias vigencias fiscales, y que en cada presupuesto anual se hagan las apropiaciones correspondientes. Así lo declarará la Corte...”

- Sentencia C- 023 de 1996

“(...) Artículo 9º: Por qué es exequible.

Invocando, erróneamente, el artículo 345 de la Constitución se dice que es inexecutable la norma que permite la autorización de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras. Se olvida que la administración puede asumir compromisos que, por su magnitud o por su costo, deban cumplirse durante varios años, es decir, bajo la vigencia de diversos presupuestos sucesivos. Por ello, el artículo acusado establece una serie de previsiones, como éstas: la autorización de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la inclusión, por parte de este Ministerio, en el proyecto de presupuesto, de las asignaciones necesarias; la autorización de los Concejos, las Asambleas, etc, en lo que les compete; la obligación de presentar, en el proyecto de presupuesto anual, un articulado sobre la asunción de compromisos para vigencias futuras.

El principio de la anualidad del presupuesto, como ya lo definió la Corte Constitucional, no implica el que la administración pública no pueda programar obras que se ejecuten en vigencias sucesivas, pues tal limitación sería absurda. Así lo definió la Corte en la Sentencia C-357 del 11 de agosto de 1994, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía.”

- Sentencia 1520 de Consejo de Estado, de 23 de octubre 2003. Ponente: AUGUSTO TREJOS JARAMILLO. Al hablar de vigencias futuras expuso:

“En el caso de las entidades territoriales, objeto de consulta, ellas pueden adquirir estos compromisos con la autorización previa del Concejo Municipal, la Asamblea Departamental o los Consejos Territoriales Indígenas, siempre que estén consignados en los Planes de Desarrollo respectivos y que sumados todos los compromisos bajo esta modalidad no excedan su capacidad de endeudamiento. (...) Como al momento de autorizarse la asunción de obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras no se ha preparado, presentado, ni expedido la respectiva ley de apropiaciones –o los correspondientes actos administrativos locales- con cargo a lo cual se han de cumplir los compromisos, el legislador impone la obligación al Gobierno de presentar, en el proyecto de presupuesto, un articulado sobre esta asunción de obligaciones para vigencias futuras...”.

3. FRENTE AL USO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA GASTOS DE INVERSIÓN.

Los gastos de inversión son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que se materialicen en bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Así mismo, se incluyen como gastos de inversión aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de éste debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la estructura física, económica y social².

El Decreto 2844 de 2010 define los proyectos de inversión pública de la siguiente manera:

Artículo 5° “Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación, atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior.”

4. FRENTE AL USO DE LAS VIGENCIAS FUTURAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

El Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, compilado³ mediante el Decreto 111 de 1996, reguló en los siguientes términos, las competencias de las entidades territoriales para expedir sus propios estatutos orgánicos presupuestales.

ARTÍCULO 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto (Ley 225 de 1995, art. 32).

² Colombia. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General del Presupuesto Público Nacional Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. — 2a ed. — Bogotá: El Ministerio, 2011. Página 261

³ Compila las leyes

ARTÍCULO 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas constitucionales y condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente.

5. ANALISIS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- INVERSION

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-151 de 95, Magistrado Ponente, Fabio Moron Díaz, intenta delimitar y precisar el Sentido del Constituyente frente a los gastos de inversión social respecto a los Gastos de Funcionamiento. Para lo cual concluye:

“(…) Trae la Carta Política en varios de sus preceptos, el concepto de inversión social para otorgarle a los gastos de esta naturaleza el carácter de gastos de inversión por oposición a lo que la ciencia económica denomina gastos de funcionamiento y gastos de servicio de la deuda (art. 24 Ley 38/89) (…)

(…) En materia presupuestal se distingue entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión, lo que busca diferenciar los destinados a consumo por parte del Estado, de los gastos productivos que generen riqueza y desarrollo. Sin perjuicio de las distintas opiniones planteadas sobre la móvil línea divisoria entre los dos conceptos puede afirmarse que los gastos de inversión se caracterizan por su retorno en término del beneficio no inmediato sino en el futuro. El elemento social agregado a los gastos de inversión, tiene un componente intenso de la remuneración de los recursos humanos que hacen posible el área social.

La Corte Constitucional considera que la noción legal de "inversión en los sectores sociales" (...) el artículo 357 de la Carta, que establece que la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación estará destinada a financiar "las áreas prioritarias de inversión social" que sean definidas por la ley. Entra entonces la Corte a determinar cuáles son los alcances del concepto de inversión social de la Carta, (...), es función de la jurisprudencia esclarecer, delimitar y precisar el sentido del pensamiento del Constituyente cuando señala los fines propios del Estado Social de Derecho.

(...) la norma constitucional habla expresamente de "inversión" y no menciona los gastos de funcionamiento y, a nivel económico y financiero, en general se tiende a oponer los gastos de inversión y los de funcionamiento. Sin embargo la Corte considera que esa interpretación no es admisible por cuanto ella comporta conclusiones contrarias a los propios principios y valores constitucionales. Si hubiera establecido una rígida dicotomía entre los gastos sociales de inversión y los gastos sociales de funcionamiento, tendríamos que un municipio, podría financiar la construcción de una escuela o de un hospital, pero no podría pagar los salarios de los médicos y los profesores respectivos. Esta conclusión es inaceptable puesto que el objetivo de la inversión y el gasto social en la Constitución no es aumentar la producción de determinados bienes físicos -como si éstos fueran valiosos en sí mismos- sino mejorar el bienestar general y satisfacer las necesidades de las personas, en especial de aquellos sectores sociales discriminados (CP art. 13), que por no haber tenido una equitativa participación en los beneficios del desarrollo, presentan necesidades básicas insatisfechas

(...)Es obvio que una inversión para una escuela que no podrá tener maestros o para un hospital que estará desprovisto de médicos es inútil e ineficiente, puesto que no sirve para satisfacer las necesidades de educación y de salud de la población del municipio respectivo. Por eso, en determinadas circunstancias, constituye una mejor inversión en el bienestar de la población que las autoridades gasten en el funcionamiento de las escuelas y los centros de salud, en vez de efectuar nuevas construcciones en este campo. Por consiguiente, interpretar de manera restrictiva el alcance del concepto de inversión social, en el sentido de que sólo

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN SANTIAGO DE CALI-SISBEN”

caben "inversiones en el sentido económico financiero del término, puede provocar una proliferación de obras físicas que, lejos de permitir una mejor satisfacción de las necesidades básicas de la población, puede hacer inútil e irracional el gasto social. Hay, pues, que compaginar la noción de inversión social con el sentido mismo de la finalidad social del Estado (CP título XII capítulo V).

(...) la Corte Constitucional estima que es racional que la noción constitucional de "inversión social" no se opone a los gastos de funcionamiento siempre y cuando estos se efectúen también en el sector social."

Constituye un principio general de interpretación jurídica el de “donde la ley no distinguió no le es dable al intérprete hacerlo”, por ello, frente a las vigencias futuras para gastos de funcionamiento debe decirse que la ley 819 de 2003 al regular las vigencias futuras ordinarias en las entidades territoriales no distinguió si los gastos que se soportarían presupuestalmente en ellas eran de inversión o de funcionamiento, como sí lo hizo con la ley 1483 de 2011 frente a las vigencias futuras excepcionales; El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística"⁴.

La Contraloría General de Medellín expidió el 11 de mayo de 2012, un concepto mediante oficio 037200-201200002927, a la Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal EPM Filiales Aguas, frente a este postrero tema:

“(…) Para dar claridad al tema que nos ocupa, es preciso ahondar en cuanto a las diferencias existentes entre las vigencias futuras excepcionales y las ordinarias.

En las vigencias futuras excepcionales, la ley 1483 de 2012, estableció en forma expresa y taxativa que **“Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico**, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.”

De lo anterior, debe concluirse, sin necesidad de más análisis que las **vigencias futuras excepcionales no podrán ser utilizadas** en ningún caso **para comprometer gastos de funcionamiento**.

Ahora, frente a las vigencias futuras ordinarias, la Ley 819 de 2003, estableció que “la corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo (...)”

Con base en esta disposición se ha cuestionado la posibilidad de emplear vigencias futuras en gastos de funcionamiento, toda vez que este tipo de erogaciones no se incluyen en el plan de desarrollo. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha emitido diversos documentos encaminados a afirmar la viabilidad de usar este mecanismo de compromiso de gastos para funcionamiento.

A manera de cita, puede referirse la Cartilla de Aplicación para Entidades Territoriales, donde dijo el Ministerio:

“Aplicación para las entidades territoriales:

Para el sector central de las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer **vigencias futuras**, tanto **en funcionamiento como en inversión** serán de iniciativa del gobierno local, previa aprobación del CONFIS en aquellas entidades territoriales que lo tengan conformado o, en su defecto que haga sus veces y deberán ser autorizadas por la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal”

⁴ Corte Constitucional Sentencia C- 151/95 Mag. Fabio Morón Díaz

Al respecto se observa que, en el caso de las vigencias futuras excepcionales, la Ley 1483 de 2012, es estricta al señalar que dichas vigencias aplican sólo para un grupo determinado de proyectos de inversión y en consecuencia, si en el caso de las vigencias futuras ordinarias el legislador no estableció diferencia, tampoco debe hacerlo el intérprete.

“Con fundamento en lo anterior, en el caso de la prohibición señalada para los concejos municipales de no autorizar vigencias futuras cuando estas no consten en el Plan de Desarrollo, se ha considerado que dicha exigencia se debe acatar, siempre que la solicitud se realice para ejecutar proyectos de inversión y considerando que los gastos de funcionamiento no se incorporan a los planes de “Control fiscal moderno y eficiente, para Medellín y su gente” desarrollo, no tendrán que constar allí para su aprobación.

Es preciso advertir que si bien es cierto la posibilidad de emplear la vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento, se considera viable jurídicamente, se advierte que por ser la vigencia futura una excepción a un principio del presupuesto, a esta sólo debe acudir en los casos absolutamente necesarios, para que no se desvirtúe el principio de anualidad que irradia al presupuesto.

En el caso en que las entidades contratan gastos de funcionamiento con compromisos en vigencias futuras, para evitar la parálisis de la administración durante los primeros días del año, se considera que la vigencia futura debe otorgarse, sólo por el plazo necesario, para que la entidad adelante un nuevo proceso de contratación y no para que contrate anticipadamente este tipo de servicios, por todo el período de gobierno. (...)”

III. INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El día 19 septiembre de 2017, se dio la participación ciudadana pertinente en la cual se inscribieron y participaron las siguientes personas:

NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	ENTIDAD
Ángel Tutistar	14433973	3148726008	BENEFICIARIO SISBEN
Mercedes del Pilar Sierra	31266448	3188080574	PRESIDENTE JAC COMUNA 13, VILLA DEL LAGO
Gerardo Solís Obando	12930784	3178848423	PRESIDENTE JAC COMUNA 15, CIUDAD CÓRDOBA.
Carmen Liliana Henao	31915546	3163679800	TRABAJADORA SOCIAL, RED PUBLICA ESE NORTE

En primer lugar, el señor Ángel Tutistar manifestó que el servicio del SISBÉN es de vital importancia para los adultos mayores puesto que el subsidio del cual es beneficiario le ha permitido mejorar su calidad de vida y, el servicio de salud del cual también es beneficiario es de muy buena calidad. Finalmente, pidió ante la Honorable Comisión que no se suspendan los servicios que se derivan de pertenecer al SISBEN, puesto que es muy necesario para las personas de escasos recursos.

Por otra parte, la señora Mercedes del Pilar Sierra, manifestó que al ser presidenta de la junta de acción comunal del barrio Villa del Lago, ubicado en la comuna 13 y antiguamente beneficiaria de los servicios por medio del SISBEN, conoce y ha disfrutado de la eficiencia y calidad del servicio, especialmente en el área de salud, al igual que también ha sido testigo de los inconvenientes de muchos usuarios debido a la demora en la contratación a principio de año, es decir, entre los meses de Enero hasta Abril. De igual manera, ha sido testigo de las dificultades para que potenciales beneficiarios puedan solicitar la encuesta que les permita ser parte del sistema. De allí, que la iniciativa de la administración de iniciar la respectiva contratación desde el mes de Enero le pareció muy acertada y pidió que no se cancele éste servicio destinado a la población más vulnerable.

El señor Gerardo Solís Obando, manifestó por su parte, que las encuestas realizadas para identificar a los posibles beneficiarios e inscribirlos en el SISBEN necesitan ser modificadas para que recojan en realidad las necesidades de los habitantes y comentó sobre casos que ha visto de habitantes del sector donde habita que se han quedado sin los beneficios del SISBEN por tener un hijo que ha completado el bachillerato, otros por tener unos determinados enceres en la vivienda que habitan y otros tantos porque los tiempos que oscilan entre el inicio de la puesta en marcha del convenio, la realización de las encuestas y otros elementos, impiden que algunas personas sean parte del sistema. De igual manera, destacó la calidad en la prestación del servicio a los usuarios que se benefician del sistema.

Por último, la señora Carmen Liliana Henao puso en conocimiento de la comisión, la negación del servicio a varias personas que se encuentran con quebrantos de salud, pero, que la demora en la puesta en marcha del convenio impide que se les brinde los servicios requeridos. Además, manifestó que varios usuarios recurren a la ESE Joaquín Paz Borrero en busca de la encuesta que les permita la oportunidad de obtener una atención de calidad, especialmente en la parte de salud puesto que sus recursos son escasos. Al igual que los demás participantes, la señora Henao hace un llamado a que la contratación sea desde el comienzo del año para que las personas accedan a los beneficios a la mayor brevedad posible.

IV. INFORME DE MODIFICACIONES

Modificación

Página 7, Párrafo 3

En este sentido si se quiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique afectar el presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario contar con una autorización del Concejo para comprometerlas, en los términos y condiciones que dispone para ello la Ley Orgánica de presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan.

Se reemplazará el término gasto por inversión, quedando así:

En este sentido si se quiere en una vigencia determinada asumir un compromiso que implique afectar el presupuesto de inversión de una vigencia futura, es necesario contar con una autorización del Concejo para comprometerlas, en los términos y condiciones que dispone para ello la Ley orgánica del presupuesto y demás normas que la modifican o adicionan.

Adición

Adiciónese con el Artículo Segundo el siguiente texto:

“De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, numeral b) (Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas).”

El cual quedara así:

ARTÍCULO SEGUNDO: APROPIACIÓN Y VIGENCIA FISCAL: De conformidad con los certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 3500077714 expedido por el Departamento de Hacienda Municipal por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$675.925.496) M/CTE y el CDP N° 3600006656 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$85.185.000) M/CTE, se cuenta con un presupuesto disponible en la presente vigencia fiscal de un total de SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$761.110.496) M/CTE, el cual representa el 17.24% del valor total de las vigencias futuras ordinarias solicitadas. De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, numeral b) (Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas).

V. CONVENIENCIA DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Acuerdo busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio del SISBEN en Santiago de Cali, en sus diferentes sedes con el fin de que los habitantes cuyas solicitudes están radicadas sean debidamente atendidos y los beneficiarios que ya se encuentran dentro del sistema, sigan disfrutando de los beneficios que les han sido otorgados. Con el fin de lograr este cometido, se invoca la figura de las vigencias futuras ordinarias como mecanismo de orden financiero que permitirá no solamente continuar con la prestación del servicio como se mencionó anteriormente, sino también, canalizar de manera oportuna y eficaz los beneficios otorgados hacia la comunidad beneficiada, ejecutar apropiadamente el presupuesto para la vigencia 2018 de manera efectiva y mejorar continuamente los indicadores presupuestales y los sociales que se encuentran enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Cali Progresas Contigo”.

Recordemos que la Ley 100 de 1993 estableció el Régimen Subsidiado cuyo propósito es asegurar el acceso de la población más pobre y vulnerable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la entrega de subsidios a quienes no están en capacidad de cotizar a dicho sistema. Establece también el Fondo de Solidaridad Pensional con el objeto de subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad de los aportes. La misma creó un programa de auxilios para ancianos indigentes e indígenas, y responsabilizó a los Municipios y Distritos para garantizar la infraestructura necesaria para la atención de los ancianos e indigentes, así como de la elaboración de planes municipales y distritales de servicios complementarios para la tercera edad.

Lo anterior, permitió crear la brecha jurídica para la creación de la Ley 60 de 1994, la cual estableció que el SISBEN fuera diseñado como un instrumento genérico para la “focalización” de programas sociales por la Misión Social del DNP, entendida como “el proceso por el cual se garantiza que el gasto social se asigna a los grupos de población más pobres y vulnerables”.

En concordancia, el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos de la Ley 1176 de 2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, define la focalización como “El proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable (...)” y establece las pautas para fijar los criterios e instrumentos para determinación, identificación y selección de potenciales beneficiarios.

El Decreto 4816 de diciembre de 2008, que reglamenta el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, define las competencias específicas de las entidades territoriales y designa como responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación, en relación con el instrumento SISBEN, la definición de “las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas de las bases de datos que hacen parte de los mencionados instrumentos, los cruces de información necesarios para su depuración y actualización así como los lineamientos para su implementación y operación, el diseño de las metodologías, la consolidación de la información a nivel nacional, los controles de calidad pertinentes; y la coordinación y supervisión de su implementación, mantenimiento y actualización”.

Por lo anterior es el gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, quien define las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas en las bases de datos, los cruces de información necesarios para su depuración y actualización, los lineamientos para su implementación y operación, el diseño de las metodologías, la consolidación de la información a nivel nacional, los controles de calidad pertinentes; en cuanto a las entidades territoriales, estas tendrán como función la implementación, actualización, administración y operación de la bases de datos, conforma a los lineamientos y metodologías que establezca el Gobierno Nacional.

De la anterior premisa se promulgó el Decreto 441 de 2017 que regula al SISBEN como instrumento de focalización de los servicios sociales, en el cual estableció en su artículo 2.2.8.2.4: “**ACTIVIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS**”. Para la implementación, actualización, administración y operación del sisbén en los municipios o distritos, estos dispondrán de los recursos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento de la dependencia que se encuentra a cargo de esta labor, en los términos que define la Ley 715 de 2001. Así mismo, acorde con su autonomía administrativa y financiera. Determinarán la implementación de un administrador del Sisbén.

El administrador municipal o distrital del Sisbén desarrollará las siguientes actividades:

1. Implementar, actualizar, administrar y operar la base de datos; de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP.
2. Instalar y configurar el software o herramienta tecnológica dispuesta y provista por el DNP para la aplicación del Sisbén.

3. Enviar la información de los registros y otra que se requiera en los términos y condiciones establecidos por el DNP.
4. Velar por la reserva y actualización de la información registrada en el Sisbén.
5. Facilitar el acceso y uso de la base de datos certificada a las entidades y programas sociales del municipio o distrito.
6. Facilitar el acceso y uso de la base de datos y la información que esta contiene.
7. Ejecutar los lineamientos dictados por el DNP para la operación del Sisbén.
8. Las demás requeridas para el correcto funcionamiento del Sisbén.

Por lo anteriormente descrito, el Municipio de Cali, como ente territorial, tiene la obligación constitucional de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, como lo son servir a la comunidad de manera eficiente por medio de la prestación de servicios para la operación, administración, actualización y mantenimiento de la base de datos del Sisbén, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable del Municipio, brindando una atención de calidad, oportuna, eficiente y sin suspensión de actividades.

En el Acuerdo 0396 de junio 11 de 2016, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali progresa contigo”, Prevé en su objeto estratégico Eje 5 Cali Participativa y Bien Gobernada- orientado a una gerencia pública basada en resultados, transparente, eficiente y moderna, donde se privilegie el servicio al ciudadano y su participación en la gestión de los asuntos públicos. En su componente 5.1: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público- Promover una gestión fiscal efectiva, que permita garantizar la sostenibilidad financiera del Municipio, con un aumento considerable de los ingresos y un manejo efectivo del gasto, dándole prioridad a la inversión social. Para ello es necesario contar con información de calidad y trabajar de manera transversal entre las dependencias de la administración, logrando la toma de decisiones acertadas para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos dispuestos en este Plan de Desarrollo 5.1.2. Programa: Información de Calidad para la Planificación Territorial: dónde se adelantarán acciones orientadas a consolidar sistemas de información armonizados (catastro, estratificación, nomenclatura), desarrollar procesos de producción de información para la toma de decisiones, infraestructura de datos estadísticos e infraestructura de datos espaciales, indicador del producto 3. Solicitud de Encuesta Sisbén atendidas.

En cumplimiento a lo expuesto, el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales- SISBÉN”, debe estar en constante actualización con el fin de facilitar la identificación de los potenciales beneficiarios para programas sociales de manera rápida, objetiva, uniforme y equitativa, facilitando la elaboración de diagnósticos socioeconómicos precisos de la población pobre y vulnerable, permitiendo el diseño y creación de programas y proyectos y dar continuidad a los actuales orientados a los sectores de menores recursos.

El Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, “Por el cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias” del Municipio de Santiago de Cali, en su artículo 76, establece que el Departamento Administrativo de Planeación es un organismo principal del sector

central con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo; este organismo es el encargado de liderar la planificación para el desarrollo integral y sostenible del municipio de Santiago de Cali en el corto, mediano y largo plazo, de manera articulada y ordenada en coordinación con los diferentes actores (locales, regionales, nacionales e internacionales), que tiene entre otras funciones, Administrar el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales SISBEN. El artículo 82 del citado Decreto establece las “Funciones de la Metodología definida por el nivel nacional para la identificación y clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales SISBEN y mantener actualizada la base de datos del SISBEN.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto en mención, corresponde al Municipio- Departamento Administrativo de Planeación Municipal, implementar el sistema de atención del usuario, beneficiario del SISBEN, y adelantar los procedimientos necesarios en aras de atender la solicitudes de encuestas nuevas, inclusión de personas, modificación de fichas, retiro de un hogar, retiro de fichas, retiro de personas del sistema, lo cual se efectúa por la competencia del ente territorial.

La Administración Municipal pretende realizar, a través de los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, la suscripción de un contrato, para desarrollar el proceso de administración e información del SISBEN en el municipio de Santiago de Cali, de conformidad con los procedimientos y lineamientos establecidos para tal propósito por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y, en desarrollo del Proyecto B.P. 07047504 “ADMINISTRACIÓN DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.

Por lo anterior resulta necesario acudir a las vigencias futuras en virtud del principio de economía, garantizando la prestación del servicio continuo, oportuno, y permanente del SISBEN cumpliendo así con los fines esenciales del Estado; por tal razón son las vigencias futuras una figura presupuestal que permite planificar y financiar proyectos bajo una óptica de largo y mediano plazo, como mecanismo eficaz para la realización de proyectos de gran envergadura con impacto social como corresponde al SISBEN.

Por último, debemos tener en cuenta que la razón de ser del SISBEN, es asegurar que los programas promovidos por el Estado, los gobiernos departamentales y por los gobiernos municipales, lleguen a aquellos estratos poblacionales que carecen de una calidad de vida óptima debido a las dinámicas económicas y sociales en las cuales se encuentran inmersos. Por ello, como Estado Social de Derecho, tenemos la obligación y el deber moral de asegurar el buen desarrollo de estos programas, sirviendo a las comunidades menos favorecidas con calidad, eficiencia y oportunamente. Así mismo, la constante actualización del SISBEN es una estrategia encaminada a identificar en tiempo real a los potenciales beneficiarios y de esta manera no solamente cumplir con unos indicadores, sino también ofrecer un servicio de calidad y mejorar el alcance de dichos programas.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA SOCIAL DEL PROYECTO

Nuestro país a lo largo del tiempo y producto de su devenir histórico, político y cultural posee una gran cantidad de población cuyas posibilidades son inferiores lo que las lleva a encontrarse en situación de vulnerabilidad y de carencia constante de los medios materiales básicos que incluso garantice al menos los mínimos vitales que conlleven a una vida digna, lo que obliga al Estado a buscar soluciones de corte social para ayudar a sobrellevar dichas vulnerabilidades por medio de la otorgación de ayudas focalizadas, teniendo en cuenta las carencias más representativas y que causan mayor impacto en la vida de quienes las requieren.

De allí, que el Estado como máximo garante de los derechos del conjunto de la población y bajo los principios de igualdad y equidad que rige el sistema democrático bajo el cual estamos inmersos, debe utilizar las herramientas jurídicas y económicas con el fin de alimentar estos programas sociales que permitan identificar las necesidades básicas a suplir y así mismo debe asegurarse de que lleguen a quienes verdaderamente lo requieren y de ésta manera ir cerrando paulatinamente las brechas de desigualdad que tradicionalmente se amplían con el correr del tiempo.

El asistencialismo estatal como herramienta de mitigación de necesidades es exitoso en la medida que las herramientas de identificación de potenciales beneficiarios sean utilizadas de manera adecuada y los recursos sean distribuidos adecuadamente. En el caso de las herramientas, se busca evitar que ingresen al sistema la población vulnerable y excluir a aquellos que pueden suplir sus costes, pero, tal cosa es posible en la medida en que el Estado escoja cuidadosamente la metodología a aplicar para la elección de tales beneficiados, ya que, también es cierto que estos indicadores son establecidos por tecnócratas expertos en estadísticas pero que por lo general poco conocen de realidades sociales apremiantes. Así mismo, se hace necesario que los demás actores involucrados en el proceso sean eficientes y proactivos para que las ayudas lleguen en el menor tiempo posible a la población beneficiada.

Conforme con lo expuesto anteriormente, se hace necesario por parte de la Corporación Concejo de Cali aprobar éste proyecto como una muestra de fuerza de voluntad frente a los desafíos que implica el manejo de la pobreza, aunque es claro que los recursos son limitados y solamente se cubrirá una parte de la población, también es cierto que no se deben detener este tipo de programas puesto que hay muchos miles de beneficiarios cuyos derechos fundamentales están en juego en caso de no darle vía libre a éste proyecto.

Los programas de corte social que vienen como política de Estado no pueden dejar de ejecutarse, so pena de que el ente territorial se vea involucrado en el incumplimiento de la Ley 715 de 2001, la cual reza que los municipios deben adelantar las gestiones pertinentes para promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población de su jurisdicción, bien sea al régimen contributivo para quienes tienen capacidad de pago o al régimen subsidiado para la población pobre y vulnerable.

**PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 050
(SEPTIEMBRE DE 2017)**

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN SANTIAGO DE CALI-SISBEN”

Además, la corporación no puede desconocer las necesidades de los miles de afiliados al sistema que actualmente son beneficiarios, así como tampoco violar los derechos de los potenciales beneficiarios a estar salvaguardados en caso de una contingencia para el caso del sistema de salud.

Por lo tanto, la Bancada del Movimiento Político Cambio Radical, considera que el proyecto de acuerdo que se pone en consideración de la Honorable Comisión de Presupuesto es de vital importancia para los estamentos de la población en situación de vulnerabilidad, puesto que pretende seguir protegiendo a sus actuales beneficiarios e incluir a otros más que ciertamente lo están necesitando y, si bien no es una solución final a la problemática de pobreza que se vive en la ciudad, si es un mecanismo que ayuda a miles de habitantes cuyas condiciones de vida no se pueden considerar dignas.

PROPOSICIÓN

Conforme lo establece la Ley 136 de 1994 concordante con el artículo 156, 157, 158, 159 y 161 del Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago de Cali, propongo a la Honorable Comisión Primera o de Presupuesto del Concejo Municipal de Santiago de Cali, dar segundo debate al Proyecto de Acuerdo No. 050 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE INVERSIÓN CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN SANTIAGO DE CALI-SISBEN”***

Atentamente:

H.C. ALEXANDRA HERNÁNDEZ CEDEÑO
Bancada Movimiento Político Cambio Radical

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones constitucionales y Legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 211 de 2007.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, para constituir una vigencia futura ordinaria de inversión del presupuesto de la vigencia 2018 por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.413.900.468) con destino al desarrollo del proyecto ADMINISTRACIÓN DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI-B.P 07047504.

ARTÍCULO SEGUNDO: APROPIACIÓN Y VIGENCIA FISCAL: De conformidad con los certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 3500077714 expedido por el Departamento de Hacienda Municipal por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$675.925.496) M/CTE y el CDP N° 3600006656 por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$85.185.000) M/CTE, se cuenta con un presupuesto disponible en la presente vigencia fiscal de un total de SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$761.110.496) M/CTE, el cual representa el 17.24% del valor total de las vigencias futuras ordinarias solicitadas. De acuerdo con el Artículo 12 de la Ley 819 de 2003, numeral b) (Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas).

ARTÍCULO TERCERO: COMPROMISO-El Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia fiscal las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Municipal.

Dado en Santiago de Cali, a () días del mes de 2017.

EL PRESIDENTE

TANIA FERNANDEZ SANCHEZ

EL SECRETARIO

HERBERT LOBATON CURREA